

Bogotá, D.C., Julio 17 de 2024

Doctora
VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONÍ
Tesorera General
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
cobro.coactivo@putumayo.gov.co

PROCESO: PROCESO DE COBRO COACTIVO N° 2024-007
EJECUTADOS: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS.
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ASUNTO: EXCEPCIONES FRENTE A LA RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ORDENA MEDIDA PREVENTIVA.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, identificada con NIT 860.037.013-6, domiciliada en Bogotá, D.C., en calidad de apoderado general de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, mediante este escrito me permito presentar **EXCEPCIONES FRENTE A LA RESOLUCIÓN No. 059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ORDENA MEDIDA PREVENTIVA.**, mediante el cual se libró mandamiento de pago contra mi representada, conforme con los argumentos que se exponen a continuación:

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DEL MEDIO IMPUGNATIVO.

En primera medida, cabe aclarar que el presente escrito se presenta dentro del término previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, y en el artículo 593 de la Ordenanza No. 766 de mayo 20 de 2018, Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo. Estas disposiciones establecen que las excepciones de mérito deben presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto de mandamiento de pago, la cual fue realizada el día 3 de julio de 2024.

Así las cosas, atendiendo a que el término fenece el 24 de julio de 2024, nos encontramos dentro de la oportunidad correspondiente para presentar el escrito de excepciones. En consecuencia, la intervención resulta oportuna.

- **PRECISIÓN PREVIA: EL TRASLADO DEL TÍTULO EJECUTIVO NO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS. VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO.**

Como proemio, es pertinente indicar que, al momento de notificar a mi prohijada la Resolución No. 059 del 24 de junio de 2024 por medio de la cual se libra mandamiento de pago no le fue entregada la totalidad de los documentos que deben hacer parte del traslado respectivo. Particularmente, no se allegó con el mandamiento de pago el título ejecutivo que dé cuenta de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible tampoco se entregó a mi procurada la liquidación de los “intereses moratorios” que sustentan la orden de apremio vulnerando con ello de manera flagrante el derecho de defensa y de contradicción que la asiste a COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A en cualquier trámite judicial o administrativo.

El funcionario ejecutor simplemente entregó a mi representada la Resolución mencionada anteriormente, en la cual se hace referencia al cobro de intereses moratorios, además de la remisión de documentos que no detallan completamente la actuación posterior. Respecto al crédito reclamado, se pretende sustentar en una liquidación que no cumple con los requisitos establecidos por la ley. No se conocen las razones por las cuales se aplicó la tasa mencionada, ni se justifica si es una tasa nominal o efectiva, ni cuál fue el criterio utilizado para calcular los intereses desde la fecha indicada. En este contexto, es desconocida la metodología utilizada por el funcionario ejecutor para tasar la presunta deuda, ya que hace referencia a "intereses moratorios", sin especificar cómo liquidó los intereses de mora (tipo de tasa aplicada, tipo de interés, etc.).

Es pertinente traer a colación lo normado en el artículo 91 del C.G.P, aplicable a este procedimiento

“En el auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario”

El traslado se surtirá mediante la entrega, en medio físico o como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado, o al curador ad litem. Cuando la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago se surta por conducta concluyente, por aviso, o mediante comisionado, el demandado podrá solicitar en la secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales comenzarán a correr el término de ejecutoria y de traslado de la demanda. (negrilla adrede)

En el caso, en concreto, lo que debió entregarse a mi prohijada era, no sólo la mentada resolución que libró mandamiento de pago, sino también los anexos y, especialmente, los supuestos títulos ejecutivos base de recaudo, los cuales deben lucir absolutamente diáfanos. Su inobservancia conlleva, inexorablemente, a la violación al debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a mi prohijada, cuyas garantías deben ser observadas en todos los trámites administrativos que se ventilen ante la Administración.

Es claro que, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, el procedimiento administrativo no puede en ninguna forma desconocer el canon contenido en el artículo 29 de la Constitución Política;

es por esto que la Corte Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, ha pregonado que el debido proceso en materia administrativa implica la garantía de estos principios: “(i)[del] principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio de la doble instancia, (v) de la presunción de inocencia, (vi) del principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) del principio de cosa juzgada y (ix) de la prohibición de la reformatio in pejus.”¹

En consecuencia, la actuación de la Administración es desproporcionada y violatoria de las garantías constitucionales arriba referidas, pues pretende que la sociedad que represento asuma el pago de unas sumas de dinero cuyo título ejecutivo no le fue entregado con el respectivo traslado, amén de desconocer la forma como calculó los intereses moratorios.

Dadas las evidentes irregularidades, refractarias a los postulados básicos constitucionales, es pertinente que la entidad enmiende su error, pues así se lo ordena el artículo 41 del CPACA:

“ARTÍCULO 41. CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.

Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de las evidentes vulneraciones al derecho de defensa y contradicción, así como a un debido proceso conforme a las garantías legales y constitucionales, es pertinente indicar que no existe una obligación clara, expresa y exigible en la forma indicada por la entidad. Resulta jurídicamente imposible que esta actuación continúe su trámite, tal y como se procede a explicar a continuación.

III EXCEPCIONES FRENTE AL AUTO QUE DICTÓ MANDAMIENTO DE PAGO.

1. LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Frente al mandamiento de pago emitido por el Departamento del Putumayo, procedo a invocar las excepciones taxativas contempladas en el Título IV, Capítulo I de la Ordenanza No. 766 de mayo 20 de 2018, que establece el Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo. Específicamente, hago referencia a la excepción quinta del artículo 594, la cual dispone:

ARTÍCULO 594. EXCEPCIONES. *Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones.*

¹ C. E., Sec. Cuarta, Sent. 19611, oct. 16/14. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
- 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.**
6. La prescripción de la acción de cobro.
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Añádase a esto que el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, que establece las excepciones que le asisten al deudor contra el mandamiento de pago, así:

“Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
- 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.**
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Con fundamento en lo establecido tanto por artículo 594 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo como por el Estatuto, y el precepto normativo 831 del Estatuto Tributario Nacional, la interposición de un medio de control de controversias contractuales, destinado a obtener la declaratoria de nulidad y el restablecimiento del derecho sobre los Actos Administrativos que conforman el título ejecutivo complejo, resulta en la imposibilidad de tramitar el proceso coactivo promovido por el Departamento del Putumayo hasta tanto la Jurisdicción de lo contencioso administrativo profiera una decisión de fondo y definitiva respecto a la nulidad de los actos acusados. En este contexto, de acuerdo con la excepción quinta mencionada anteriormente se muestra a todas luces procedente generando efectos legales de cara a la exigibilidad del título ejecutivo.

La excepción invocada debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 591 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, el cual establece el momento a partir del cual se concreta el fenómeno procesal de la ejecutoria de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 591. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo.

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.
4. **Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.”**(negrilla adrede)

En línea con lo anterior, el artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional establece de igual modo el momento a partir del cual adquieren firmeza los actos administrativos que conforman el título ejecutivo que se pretenda ejecutar en vía coactiva, de la siguiente manera:

“Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. **Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.** (negrilla adrede)

Lo precedentemente expuesto tiene su origen normativo en lo establecido en el artículo 77 Ley 80 de 1993 que dispone que los actos administrativos expedidos por la administración en el desarrollo de la actividad estatal contractual serán susceptibles de control a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales, así:

“ARTÍCULO 77.- De la Normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la Función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 1.- El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 2.- Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.

Como corolario de lo expuesto el Consejo de Estado respecto se ha pronunciado sobre el medio de control idóneo para que la compañía de seguro promueva demanda sobre los actos contractuales de los que se desprenden las obligaciones insertadas en las pólizas de seguro de cumplimiento, siendo este el medio de control de controversias contractuales el adecuado para pretender nulitar los actos administrativos proferidos al interior del proceso sancionatorio contractual establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:

*“En atención al hecho de que, **por regla general, la aseguradora garante es parte del contrato de seguro, en el cual la entidad estatal tiene la calidad de beneficiaria de la póliza de cumplimiento correspondiente, se concluye que está legitimada por activa o por pasiva, según sea el caso, para obrar como demandante o demandada en los litigios en los que se discuten las obligaciones derivadas de la póliza de cumplimiento por ella expedida.**”² (negrilla adrede)*

En otra oportunidad la Sala señaló:

*“**La acción procedente para reclamarle a la aseguradora el cumplimiento de las obligaciones derivadas contrato de seguro es la acción contractual y no la ejecutiva,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1053 del Código de Comercio. El artículo 1053 del Código de Comercio señala las circunstancias en que las pólizas prestan mérito ejecutivo, entre éstas, cuando no son objetadas al mes siguiente de la reclamación ante la aseguradora, (...) Contrario a lo afirmado por el tribunal, no existía un título ejecutivo al momento de la presentación de esta acción de controversias contractuales”³ (negrilla adrede)*

En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado expuso:

*“**Acción idónea para perseguir la nulidad del acto administrativo que declara el siniestro del incumplimiento de un contrato:***

Esta conclusión a la que llega la Sala respecto de la idoneidad de la acción elegida por la sociedad actora, no se altera por el hecho de que se persiga la nulidad del acto administrativo que declara el siniestro del incumplimiento de un contrato para hacer efectiva la garantía de calidad del bien entregado por el contratista a la entidad pública, según lo prescrito por el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

² Sala de lo Contencioso Administrativo Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico Fecha: 24 de abril de 2020 Número de Radicación: 63001-23-33-000-2018-00132-01(64154)

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. (2021, marzo 17). Sentencia 73001-23-31-000-2011-00166-01(52705). Ponente: Martín Bermúdez Muñoz.

“ Al respecto, conviene advertir que ya la Sección había concluido que los actos expedidos por la Administración después de terminado el contrato, como son aquellos mediante los cuales se declara el siniestro para que el contratista responda precisamente, por vicios y defectos de la obra o por la calidad del servicio prestado o bien suministrado, participan de la naturaleza de actos contractuales, por ser expedidos como consecuencia de la ejecución del respectivo negocio jurídico y, además, que su discusión judicial se subsume en la acción de controversias contractuales” (negrilla adrede)

La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido dentro de las prerrogativas de la administración, precisamente, la de declarar mediante acto administrativo motivado el siniestro del riesgo de cumplimiento de las obligaciones o de estabilidad de la obra y calidad de los bienes suministrados, asegurados mediante las garantías del contrato, con las cuales se salvaguarda el interés público y se protege patrimonialmente a la administración. **Para tal efecto, se apoyó en el numeral 5 del artículo 68 del C.C.A, según el cual las pólizas en las que la administración es beneficiaria prestan mérito ejecutivo al integrarse al acto administrativo ejecutoriado que declara esa obligación, de donde se origina la potestad de declarar el siniestro sin que el asegurador se oponga directamente a la entidad, sino que debe demandar el acto ante la jurisdicción para impugnar su validez, y aclaró, incluso, que se trataba de un privilegio, sin carácter sancionatorio, que permitía su ejercicio después de la ejecución del contrato y de su liquidación, que permitía su ejercicio después de la ejecución del contrato y de su liquidación.(...) para la Corporación ha sido claro que frente a los contratos estatales, la administración goza de la facultad de declarar el siniestro de una póliza mediante un acto administrativo unilateral, potestad que no es sancionatoria ni se reduce a algunos tipos de amparos de la póliza o garantía, y que no tienen los particulares en el desarrollo de su actividad contractual, pues sitúa a la entidad en una posición de privilegio, dado que le basta la expedición del acto debidamente motivado, el cual goza de la presunción de legalidad para iniciar la ejecución.”⁴**

En virtud de lo expuesto, la acción de controversias contractuales se erige como el medio de control idóneo para impugnar los actos administrativos expedidos en el marco de un proceso sancionatorio que declara el siniestro de un contrato de seguro. Esto se fundamenta en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, que dispone que los actos administrativos derivados de la actividad contractual son susceptibles de control a través de dicha acción.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reiterado que, tratándose de obligaciones derivadas de la póliza de seguro de cumplimiento, la acción de controversias contractuales es la vía procedente para las aseguradoras, quienes están legitimadas para actuar en defensa de sus intereses contractuales. Este criterio ha sido respaldado por la jurisprudencia, que establece que los actos administrativos que declaran siniestros relacionados con contratos estatales participan de la naturaleza de actos

⁴ Consejo de Estado. (2012, 23 de febrero). Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (Subsección B), Radicado No. 050012326000199400558-01. Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá, D.C. Sistemas Integrados Eléctricos Ltda.–SINTEL Ltda. vs. Departamento de Antioquia.

contractuales, debiendo ser impugnados a través de la acción de controversias contractuales y no mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, no es de recibo que el Departamento del Putumayo pretenda pretextar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sea el medio de control correspondiente para la suspensión del proceso coactivo, ya que la jurisprudencia y la normativa vigente claramente señalan que la acción de controversias contractuales es el procedimiento adecuado para controvertir tales actos administrativos que conforman el título ejecutivo.

Ahora, sobre la suspensión del proceso de cobro coactivo el alto Tribunal ha referido:

*“En el caso bajo análisis, encuentra la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante auto 29337 del 19 de abril de 2016, suspendió el proceso de cobro coactivo adelantado contra la demandante () **En ese contexto, encuentra la Sala que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el auto de 19 de abril de 2016, se encuentra acorde a lo previsto en el artículo 101 de la Ley 1437 del 2011, pues ante la solicitud de la demandante, y al estar acreditado que está pendiente de decirse en sede contencioso administrativa la legalidad del título ejecutivo, procedió a la suspensión del proceso de cobro coactivo.**”⁵ (negrilla adrede)*

En virtud de lo anterior, se tiene que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la viabilidad de la excepción de interposición del medio de control contra los actos que fundamentan el proceso de cobro coactivo cuando no se encuentran ejecutoriados. Por consiguiente, no es dable expedir mandamiento de pago hasta tanto no se adopte una decisión definitiva por parte del juez administrativo:

“En esos términos, observa la Sala que, tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando esta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra.”⁶ (negrilla adrede)

Descendiendo lo expuesto al presente caso, los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo se encuentran demandados mediante acción de controversias contractuales, demanda que se impetró contra el Departamento del Putumayo el 22 de abril de 2024, siendo el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO** quien avocó conocimiento bajo el número de radicado 52001233300020240011900; proceso que se encuentra cursando su respectivo trámite ante la jurisdicción de lo Contencioso administrativo.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (2021, marzo 18). Sentencia 25000-23-37-000-2016-01046-01 (23881). Ponente: Milton Chaves García.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (2016, marzo 17). Sentencia número 25000-23-27-000-2011-00217-01(20658). Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

7

Mocoa, 26 de junio de 2024

Radicación	520012333000-2024-00119-00
Medio de control	Controversias contractuales
Demandante	Compañía Mundial de Seguros S.A. mundial@segurosmondial.com.co
Apoderado	Gustavo Alberto Herrera Ávila notificaciones@gha.com.co
Demandados	Departamento del Putumayo
Ministerio público	Aida Elena Rodríguez Estrada Procuradora 156 Judicial II para Asuntos Administrativos arodriguez@procuraduria.gov.co
Asunto	Auto que avoca conocimiento

8

Los actos administrativos contractuales controvertidos en el presente medio de control corresponden a aquellos que conforman el título ejecutivo complejo que ahora se pretende ejecutar. Estos actos, esenciales para la configuración del título ejecutivo, están siendo objeto de control de legalidad por el juez administrativo y se detallan de la siguiente manera:

1. Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023 "por medio de la cual se declara el siniestro con cargo al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo otorgado mediante Seguro de Cumplimiento a favor de entidades Estatales No. NB-100100415 que garantiza el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

2. Resolución No.022 del 12 de mayo de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 021 DE 2023 "Por medio de la cual se declara el siniestro con cargo al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo otorgado mediante Seguro de Cumplimiento a favor de entidades Estatales No. NB-100100416 que garantiza el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

3. Resolución No. 038 del 10 de octubre de 2023 "Por medio de la cual se declara el siniestro con cargo al amparo de cumplimiento otorgado mediante Seguro de Cumplimiento a favor de entidades Estatales No. NB-100100416 que garantiza el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

4. Resolución No. 051 del 19 de diciembre de 2023 "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 038 del 10 de octubre de 2023, por la cual se declara el siniestro con cargo al amparo de cumplimiento otorgado mediante Seguro de Cumplimiento a favor de entidades Estatales No. NB-100100416 que garantiza el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

9

Además de lo mencionado anteriormente, en la demanda interpuesta por mi representada contra el Departamento del Putumayo el 22 de abril de 2024, se solicitaron también medidas cautelares. En particular, se requirió la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de prevenir daños

⁷ Consulta procesos Rama Judicial

⁸ ibidem

⁹ Demanda medio de control de controversias contractuales.

irreparables y asegurar el cumplimiento efectivo de una eventual sentencia favorable, garantizando así los derechos e intereses de mi representada durante el proceso.

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA:

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTOS ADMINSTRATIVOS

DEMANDANTE:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DEMANDADOS:

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Todo lo anterior implica que la ejecutoriedad de los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo se encuentra en entredicho hasta que la jurisdicción competente emita una decisión definitiva. Este estado de incertidumbre jurídica afecta la capacidad del Departamento del Putumayo para hacer exigible la ejecución del título ejecutivo complejo, razón suficiente para que se mantenga en suspenso la ejecución de los actos administrativos controvertidos hasta que se resuelva de manera concluyente el fondo del asunto por parte del Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, que avocó conocimiento de la causa el 26 de junio de 2024. Esto constituye un hecho exceptivo probado.

2. **FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO: LA OBLIGACIÓN NO ES CLARA, EXPRESA NI EXIGIBLE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN RELACIÓN CON LA CAUSACIÓN DE INTERESES CORRIENTES.**

En relación con el mandamiento de pago emitido por el Departamento del Putumayo y la medida preventiva ordenada mediante la Resolución No. 059, es evidente que se ha incluido una obligación que no forma parte del título ejecutivo complejo. Asimismo, el Auto No. 107, que dispone el mandamiento de pago a favor del Departamento del Putumayo y en contra de mi representada, presenta serias irregularidades en su expedición, afectando directamente la ejecutabilidad del título. Para abordar este asunto, es pertinente desglosar y referirse al artículo 422 del Código General del Proceso

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.” (Énfasis es propio).

La circunstancia por la cual el acto administrativo en particular adolece de la ejecutabilidad de la que se vale el ente territorial, y que impide exigir el pago de la suma allí contenida, yace en la ausencia de los requisitos del título. Específicamente, el contenido del título no contempla una obligación

actualmente expresa, clara y exigible que surta efectos obligacionales frente a la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Esto se debe a que la administración pretende el cobro de intereses corrientes desde la fecha en que el Departamento giró el anticipo al contratista afianzado hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligación, así:

2° Por los intereses que genere el anticipo no ejecutado del contrato 1225 de 2018, desde la fecha que el Departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación.

Sobre ese particular no puede perderse de vista que nos encontramos ante un título ejecutivo complejo por cuanto lo conforman el acto administrativo inicial Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023 junto con los actos administrativos que resuelven los recursos, esto es Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023.

Adviértase que la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, mediante la cual se declaró el siniestro con cargo al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, no incluyó en su parte resolutiva la obligación de pagar los intereses generados por el anticipo no ejecutado del Contrato 1225 de 2018. Estos intereses, que abarcan desde la fecha en que el departamento giró el anticipo hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligación, no se establecieron como una obligación susceptible de ejecución. Únicamente se dejó claro que la obligación de la compañía de seguros debía ser cancelada en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, como se expone a continuación:

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO amparado por la Póliza de cumplimiento No. NB-100100416 expedida por MUNDIAL DE SEGUROS S.A, con cargo al amparo de buen manejo del anticipo, en cuantía de **CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$5.247.963.388,45) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** **Parágrafo:** El valor del siniestro deberá ser cancelado en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio.

Por su parte, la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, confirmó en su integridad dicha resolución, sin que se haya adicionado o modificado apartado alguno que permitiera a la Tesorera General del Departamento del Putumayo incorporar una obligación que no se insertó en el título ejecutivo complejo, como lo es el pago de intereses corrientes a partir del giro del anticipo no ejecutado desde la fecha en que el departamento giró el anticipo. Pretender la exigibilidad de tal obligación resulta improcedente e inconsulta, ya que se intenta declarar y ejecutar una obligación que no forma parte del título ejecutivo complejo *per se*, como puede constatare claramente por el Departamento del Putumayo:

ARTÍCULO PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución No. 021 del 21 de Abril de 2023 por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

En vista de lo anterior, no es procedente que el Departamento del Putumayo liquide el crédito incorporando una nueva obligación que no hace parte del título ejecutivo, lo cual riñe con los presupuestos necesarios para que puedan demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. Por ello, el mandamiento de pago reviste falta de título, ya que se pretende ejecutar unos intereses corrientes computados desde la fecha de entrega del anticipo al contratista, desconociendo que la obligación en cabeza de la compañía de seguros pende del acto administrativo por medio del cual se declaró el siniestro, esto es, con la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023 y la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023. En ningún momento la compañía aseguradora asume la totalidad de las obligaciones del contratista, sino las que expresa y previamente se hayan pactado en el contrato de seguros de acuerdo con la ley; no es posible atribuirle a la aseguradora el deber de reintegrar el anticipo junto con sus intereses corrientes, pues esta nunca recibió el dinero ni debía amortizarlo dado que no pueden abrogarse obligaciones que no le corresponden.

Nótese que el 16 de mayo de 2023 fue la fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución por medio del cual se resolvieron los recursos de ley, siendo que a partir de esta cuando debió computarse inicialmente el término establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio, el cual establece que el asegurador está obligado a realizar el pago del siniestro dentro del mes siguiente de declarado el mismo sobre el hecho constitutivo del riesgo asegurado, así:

“El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.” (negrilla adrede)

Lo anterior quedó consignado a su vez en la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023:

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO amparado por la Póliza de cumplimiento No. NB-100100416 expedida por MUNDIAL DE SEGUROS S.A, con cargo al amparo de buen manejo del anticipo, en cuantía de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$5.247.963.388,45) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. **Parágrafo:** El valor del siniestro deberá ser cancelado en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio.

Nótese, entonces, que la resolución que desató el recurso de reposición incoado, en ningún apartado, hizo referencia a que mi representada debía asumir el pago de intereses desde la fecha que el Departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación. Por ende, constituye una razón más para concluir que no existe una obligación clara, expresa y exigible, que provenga de mi representada y que esté debidamente identificada en las mentadas resoluciones. Por tal motivo, no puede hablarse de la existencia de un título ejecutivo por la potísima razón de que los actos (que no contiene en la obligación tal y como lo indica la ley para que pueda ser ejecutada) no hacen referencia a la suma líquida de dinero que hoy se ejecuta y, mucho menos, hace mención a que mi representada debe asumir el pago de intereses.

El Consejo de Estado de manera reiterada, con base en lo previsto en el artículo 422 del CGP, ha señalado que los títulos ejecutivos, al margen de si son simples o complejos, deben gozar de unas condiciones formales y otras sustanciales: Las primeras se refieren a que los documentos en los que consta la obligación deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una decisión condenatoria proferida por un juez o un tribunal u otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva y, las segundas, se traducen en que las obligaciones a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante deben ser claras, expresas y exigibles.

Pues bien, adviértase, entonces, que en ningún apartado de las resoluciones proferidas en la actuación administrativa sancionatoria (una de ellas que sirvió de soporte para librar mandamiento de pago) no hace referencia: **a)** que mi procurada debe asumir el pago de intereses desde la fecha que el departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación **b)** que mi representada adeuda la suma de \$2.003.002.186 por concepto de intereses moratorios **c)** la forma cómo ha de calcularse la mora en caso de no pagarse la suma de dinero indicada en las mentadas resoluciones. Por ende, resulta claro que los documentos presentados como sustento de recaudo no contienen una obligación clara, expresa y exigible, razón por la cual se insiste no hay título ejecutivo.

Emerge así palmario que la Gobernación del Departamento del Putumayo erró al incorporar al mandamiento de pago obligación que no consta en el documento que proviene del título ejecutivo complejo, por lo que no puede constituirse como plena prueba contra el asegurador y, por consiguiente, dicha obligación no es expresa, clara ni mucho menos exigible. En razón de que el título ejecutivo complejo determinó que los intereses se causarían de conformidad con el artículo 1080 del Estatuto Comercial colombiano y no de la arbitraria manera en que se pretende por parte de la administración pública, en directo desmedro del patrimonio de la Compañía Mundial de Seguros S.A. De mantenerse tal situación, la administración incurriría en un enriquecimiento sin justa causa, y por descontado en una responsabilidad del Estado.

En palabras del Consejo de Estado, para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución requieren cumplir requisitos de forma y fondo, respecto del fondo el máximo tribunal refiere que:

“Una obligación es (i) expresa cuando está determinada en el mismo título, de forma nítida, sin que sea necesario acudir a lucubraciones, suposiciones o razonamientos lógicos jurídicos para determinarla. En este punto, no se puede soslayar que el título ejecutivo puede emanar de una confesión ficta o tácita, en razón de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; (ii) es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido y (iii) exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.”¹⁰ (negrilla adrede)

Además de la innegable importancia de los requisitos que componen el título ejecutivo, el Honorable Consejo de Estado examinó la efectividad del título en los siguientes términos:

“El inicio de un proceso administrativo de cobro implica la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por no estar pendiente de ningún plazo o condición. El artículo 828 del Estatuto Tributario, señala los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo, que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a iniciar el proceso mediante la expedición del correspondiente mandamiento de pago.”¹¹ (negrilla adrede)

Desde el punto de vista de la a Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 6 de junio de 2007, reiterada en fallo del 26 de mayo de 2016, señaló:

“específicamente respecto del cobro ejecutivo de las pólizas de seguro tomadas por los contratistas de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, es decir, en aquellos eventos en los que la Administración reclama judicialmente el pago de la indemnización contenida en esa póliza de seguro, se observa que ésta, constituye apenas, uno de los componentes del título ejecutivo complejo que en estos eventos de cobro ejecutivo de obligaciones contractuales a favor de la Administración, se debe conformar, y que comprende, no sólo la respectiva póliza -en la que consta el traslado del riesgo que el contratista de la Administración le hizo a la aseguradora, respecto de su deber de indemnizar a la entidad estatal por los perjuicios surgidos de su incumplimiento contractual-, sino también, el contrato estatal y el acto administrativo mediante el cual se declaró la existencia del siniestro

La obligación es expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en

¹⁰ C.E., Secc. Tercera, Sent. 2000-01184, may. 29/2014. M.P. Conto Díaz del Castillo Stella

¹¹ 2 consejo de Estado Sala de lo contencioso Administrativo Sección Cuarta, C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto, Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01291-01(23288), Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple revisión del título ejecutivo y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de esta porno estar pendiente de un plazo condición”¹² (negrilla adrede)

Por las razones anteriores, la obligación de computar intereses desde que se giraron los recursos al contratista no es expresa, puesto que no se consignó en el título ejecutivo. Tampoco es clara, ya que en el título ejecutivo complejo se determinó que los intereses para el asegurador se computarían de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio y no de la manera indebida como pretende el Departamento del Putumayo. Por lo tanto, el mandamiento de pago no es exigible a mi parte, ya que se incorporaron obligaciones que no forman parte del título ejecutivo y las sumas calculadas con intereses no cuentan con respaldo normativo que así lo determine.

3. FALTA DE COMPETENCIA DE LA TESORIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PARA EL COBRO DE INTERESES CORRIENTES

El artículo 831 del Estatuto Tributario establece que, contra el mandamiento de pago, procederá la excepción de “incompetencia del funcionario que lo profirió”. De conformidad con el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los documentos que tienen mérito ejecutivo a favor del Estado, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, son los siguientes:

“Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

- 1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.*
- 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.*
- 3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.*
- 4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.*
- 5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.*

Como puede observarse en el auto que libró mandamiento de pago, su fundamento no tiene soporte en ninguno de los instrumentos citados en la disposición arriba transcrita. En ese contexto, no es

¹² Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta consejero Ponente: Milton Chaves García Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación Número: 15001-23-33-000-2014-00538-01 (24765)

atinado interpretar que los artículos 98 a 101 del CPACA le otorguen competencia a la entidad ejecutante para cobrar, por la vía coactiva, los intereses moratorios indicados en el mandamiento de pago y menos en la forma como lo pretende, pues claramente no se encuentra enlistada dentro de los instrumentos indicados en el artículo 99 ibidem.

La Resolución 021 del 21 de abril de 2023 que declaró el incumplimiento del contratista, fue confirmada mediante la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023; en tal virtud, una vez quedó ejecutoriada esta última, la administración dejó incólume los siguientes artículos:

*“(...) ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO amparado por la Póliza de cumplimiento No. NB-100100416 expedida por MUNDIAL DE SEGUROS S.A., con cargo al amparo de buen manejo del anticipo, en cuantía de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$5.247.963.388,45) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Parágrafo: **El valor del siniestro deberá ser cancelado en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio** (...).” (subrayado y negrita fuera de texto).*

De conformidad con lo establecido en el acto administrativo, el pago debe ser efectuado en la forma consagrada en la norma de orden público y de obligatorio cumplimiento contenida en el citado artículo 1080 del C. Co., que estatuye:

“ARTÍCULO 1080 PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES MORATORIOS. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad (...).” (subrayado y negrita fuera de texto)

Entonces, basándonos en el acto administrativo y lo establecido en el artículo 1080, cuya observancia fue acatada por la administración, es importante tener en cuenta que el valor de la indemnización se hizo exigible y debía pagarse dentro del mes siguiente al momento en que se dictó dicho acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, el 16 de mayo de 2023, fecha en la que se expidió la Resolución 022. Por lo tanto, la aseguradora tenía la posibilidad de realizar el pago sin que se cobrara ningún tipo de interés hasta el día 16 de junio de 2023. A partir de esta fecha, podrían generarse los intereses que, como se explicará en la siguiente excepción, son los intereses civiles establecidos en el artículo 4º, ordinal 8º de la Ley 80 de 1993.

Valga traer a colación el artículo 6 de la Constitución Política, del cual se desprende la prohibición para los funcionarios públicos de extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones. Es evidente que estos están sujetos al estricto cumplimiento del rol que desempeñan en la administración pública, y, de lo contrario, al sobrepasarlo, incurrirían en una posible responsabilidad. Las actuaciones ejecutadas en exceso se considerarían abiertamente inconstitucionales, ilegales o irregulares.

En tal virtud, como la aseguradora contaba con el plazo de un mes para pagar y, solo después de vencido este el legislador previó la posibilidad de que se generaran intereses, necesariamente la liquidación del crédito debe ocuparse sólo y exclusivamente de intereses a partir de esa fecha.

No es procedente el cobro de intereses corrientes antes de las fechas indicadas, dado que ni durante el procedimiento de sanción contractual, en el cual se debía probar la infracción respectiva, ni en el acto administrativo que declaró el incumplimiento, se estableció la procedencia de tales intereses. Esto se debe a que solo con la decisión que declaró el siniestro y afectó el amparo de la póliza, se determinó la obligación de pagar el valor respectivo de \$5.247.963.388,45. En consecuencia, dado que ni la administración, ni el acto administrativo, ni la ley contemplan la posibilidad de que se causen intereses corrientes o de plazo antes de la declaración del siniestro, no es procedente incluir ningún valor por concepto de intereses en la liquidación del crédito, ya que estos no existen previamente. Este criterio se ve respaldado por el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual establece que el riesgo asegurado solo se materializa ante un suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, el asegurado o el beneficiario, y cuya ocurrencia da lugar a la obligación del asegurador.

“ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento.

Por su parte, la obligación condicional inserta en la póliza de seguro solo se hará exigible ante la compañía de seguros en el momento en que se declare el siniestro, lo cual corresponde a la realización del riesgo asegurado. Esto implica que los intereses moratorios solo se pueden computar una vez declarado y acreditado el siniestro, así como la cuantía de la pérdida, y una vez transcurrido el término estipulado en el artículo 1080 del Código de Comercio, y no antes. Para el momento en que se giraron los recursos del anticipo al contratista, no se había declarado el siniestro ni se había comprobado la realización del riesgo asegurado ni la cuantía de la pérdida.

“ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.”

Empero, esta norma debe leerse en armonía con lo dispuesto en el art. 1077 del mismo estatuto, el cual precisa que:

“Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”.

En definitiva, la entidad ejecutora debe acudir ante el juez competente para perseguir el pago de las presuntas obligaciones incumplidas, ya que carece de competencia y autorización para cobrar coactivamente intereses moratorios que no fueron establecidos en el título ejecutivo complejo, o en su

defecto y en gracia de discusión la liquidación del crédito debe restringirse únicamente a los intereses que puedan devengarse después del 16 de junio de 2023, ajustándose estrictamente a lo dispuesto por la ley y los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo.

4. **LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PRESENTADA POR EL DESPACHO SE REALIZÓ DE MANERA ERRÓNEA – EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NO APLICÓ LA REGLA DEL ARTÍCULO 4º, ORDINAL 8º DE LA LEY 80 DE 1993, ESTATUTO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, Y EL PLAZO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO**

Centro la atención de la Tesorera General del Departamento de Putumayo en este aspecto, ya que la liquidación del crédito emitida por el ente territorial resulta exorbitante por dos razones fundamentales. En primer lugar, no se tuvo en cuenta que los intereses que se deben imputar a mi representado deben comenzar a computarse a partir del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución que declaró el incumplimiento del contratista afianzado, de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio. En segundo lugar, la administración desconoce que a la aseguradora no le son aplicables los intereses del artículo 1080 del Código de Comercio, ya que su obligación se contrae a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del garantizado.

En ese sentido, deberá el Departamento executor dar aplicación a la regla contenida en el del artículo 4, ordinal 8 de la Ley 80 de 1993,

“8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. (negrilla adrede)

La liquidación del valor de la sanción contractual que está cobrando coactivamente el departamento, legalmente tiene que sujetarse a lo regulado en la Ley 80 de 1993, así como a lo establecido en los precedentes judiciales obligatorios, reiterados en la sentencia del Consejo de Estado, del 24 de abril de 2024 Consejero Ponente Dr. William Barrera Muñoz, radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472), la cual es vinculante y obligatoria en la cual, respecto de la liquidación de los intereses moratorios en tratándose de sanciones u obligaciones contractuales, se reiteró que a los aseguradores el cálculo respectivo debe realizarse con base en lo consagrado en la Ley 80 de 1993, como se acredita con la siguiente transcripción de dicho fallo, del cual se adjunta copia íntegra:

“(…) En primer lugar, debe resaltarse que, en sede del contrato de seguro, según lo dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio, el incumplimiento de la obligación de indemnizar u objetar dentro del mes siguiente a que se presente la reclamación implica la causación de intereses moratorios equivalentes al bancario corriente aumentado en la mitad.

***No obstante, este es un contrato de seguro en el que una de las partes, según lo definimos anteriormente, es una entidad pública de las referidas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual es un contrato que adquiere la connotación de estatal, regido por el Estatuto General de la Contratación Pública. Ahora bien, en los términos del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo por lo particularmente regulado en ese compendio normativo. Y, en lo que atañe el cálculo de intereses moratorios, la Ley 80 de 1993 trae una norma especial que determina que, a falta de pacto entre las partes en contrario, la tasa de intereses aplicable es la del doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. (…)*”. (la negrilla es ajena al original)**

En el caso está claro que se dan los presupuestos normativos por los cuales debe aplicarse la Ley 80 de 1993, como lo ha reiterado en línea jurisprudencial vinculante el Consejo de Estado, según las siguientes precisiones:

1. El Departamento del Putumayo celebró el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 con el Consorcio Vías Terciarias, el cual fue garantizado por la Póliza No. NB-100100416 expedida por mi representada.
2. El Departamento del Putumayo es una entidad estatal, según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
3. Ni en el Contrato Estatal de Obra Pública No. 1225 de 2018, ni en el de seguro citado, existe estipulación alguna de intereses y por lo tanto le son aplicables los del citado artículo 4.
4. Como el Departamento del Putumayo figura como asegurado y beneficiario en el contrato de seguro, Póliza No. NB-100100416, este último también es un contrato estatal, como lo ha señalado el Consejo de Estado al establecer la naturaleza jurídica de las pólizas de cumplimiento que garantizan contratos estatales, y en tal virtud está regido por las normas especiales de la Ley 80 de 1993 y, en lo no previsto en esta, por el Código de Comercio.
5. Habiéndose declarado el siniestro afectando la Póliza NB-100100416, a la compañía Mundial de Seguros únicamente se le podrían cobrar los intereses moratorios con base en el citado artículo 4 ordinal 8 de la Ley 80 de 1993.

Bajo la anterior tesitura, y contrario a lo liquidado por el Departamento del Putumayo, no es procedente aplicar una única tasa de interés moratorio a la totalidad de los meses en los que, de acuerdo con la liquidación de la entidad, este fue causado a partir del 21 de marzo de 2019. Lo correcto era imputar intereses al asegurador una vez finalizado el plazo del artículo 1080 del Código de Comercio, y no desde el giro de los recursos al contratista afianzado. Tampoco es admisible que el Departamento haya computado los intereses como si cada mes contable tuviera 31 días, cuando el proceder adecuado es computar con 30 días calendario, error que distorsiona y difiere en grado superlativo el cálculo real de los intereses debidos.

En consecuencia, se hace necesario revisar y ajustar la liquidación del crédito de manera que se respete el plazo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio para el cálculo de intereses moratorios aplicables al asegurador, y se corrija el método de cómputo de los días del año contable, aplicando correctamente los 30 días calendario por mes.

Así las cosas, la liquidación que en derecho corresponde no es otra más que una en la que se aplique el interés moratorio variable mes a mes, conforme a los indicado en el Ley 80 de 1993. A continuación, expongo la liquidación que elaboramos internamente, respetando la tasa del índice del consumidor para cada uno de los meses comprendidos entre el 16 de mayo de 2023 y el 18 de julio de 2024, así:

Actualización valor histórico	
CAPITAL	\$ 5.247.963.388,45
IPC FINAL	143,38
IPC INICIAL	133,78
Valor Actualizado	\$ 5.624.555.169,95

Fecha inicial	Fecha final
16/06/2023	31/12/2023
1/01/2024	18/07/2024

Valor total a pagar Capital Actualizado + Intereses	\$ 6.380.899.837,95
---	---------------------

De acuerdo con la liquidación anterior, el valor total de la obligación asciende a **CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS** (COP \$5.624.555.169,95). Esta cifra es ostensiblemente inferior y se ajusta a lo consagrado en el ordinal 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993. Esta suma representa la real liquidación del crédito que se ejecuta y sobre la cual debió

versar el mandamiento de pago. Por tanto, es suficiente razón para que se ajuste la liquidación del crédito conforme a lo expuesto.

5. FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO - LA OBLIGACIÓN QUE SE PRETENDE EJECUTAR SUPERA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.

El mandamiento de pago objeto del hecho exceptivo no consideró el límite de valor asegurado establecido en la Póliza de Seguro de Cumplimiento para Entidades Estatales No. NB-100100416. Según la referida póliza, el amparo afectado en las resoluciones que forman parte del título ejecutivo se limitó al buen manejo del anticipo por un monto de \$5.247.963.388,45. Sin embargo, el mandamiento de pago incluye una liquidación de crédito por la suma de \$9.437.936.389, superando así el límite acordado para el amparo del buen manejo del anticipo. En consecuencia, la obligación de mi representada debería estar limitada únicamente a dicho monto y no al valor exorbitante que se liquidó junto con el mandamiento de pago.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO amparado por la Póliza de cumplimiento No. NB-100100416 expedida por MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con cargo al amparo de buen manejo del anticipo en cuantía de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$5.247.963.388,45) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Parágrafo: El valor del siniestro deberá ser cancelado en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio.

Conviene resaltar que la Póliza de Seguro de Cumplimiento para Entidades Estatales No. NB-100100416 consta de un total de 9 anexos, siendo el último de ellos expedido el 26 de agosto de 2022. En la carátula del mismo se establece la vigencia de cada uno de los amparos, y respecto al buen manejo del anticipo, se evidencia que el límite de la suma asegurada es significativamente inferior al determinado en la liquidación de la obligación, así:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/08/2020	24:00 Horas Del 31/05/2022	2.441.741.760,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/08/2020	24:00 Horas Del 31/01/2025	1.220.870.880,40	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 19/08/2020	24:00 Horas Del 31/05/2022	7.325.225.282,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/01/2022	24:00 Horas Del 31/01/2027	2.441.741.760,00	0,00

En este orden de ideas, mi procurada no está llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)*

Por consiguiente, queda claro que mi representada no puede ser requerida a pagar una indemnización que supere el límite de la suma asegurada acordada. Específicamente, bajo el amparo de buen manejo del anticipo, la responsabilidad de mi mandante se limita estrictamente a la porción del riesgo cubierto por la póliza. Esto garantiza que cualquier reclamación económica debe ajustarse a los términos y condiciones previamente pactados, evitando así cualquier posibilidad de exceder los límites establecidos contractualmente.

6. EL PAGO EFECTIVO COMO MODO DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN.

El artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional contempla de manera taxativa el pago efectivo de la obligación como aquella excepción que conlleva la fuerza persuasiva de dar por terminado el proceso de cobro ejecutivo y, por ende, el levantamiento de las medidas preventivas decretadas.

“Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.”

(..)

A tono con lo anterior, en el Título IV, Capítulo I de la Ordenanza No. 766 de mayo 20 de 2018, que establece el Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, se dispone de manera taxativa que el pago efectivo de la obligación constituye una excepción frente al mandamiento de pago, capaz de enervar la continuación del proceso en sede coactiva, así:

“ARTÍCULO 594. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones.

1. El pago efectivo.

¹³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

(..)

En virtud de la liquidación previamente expuesta, donde se aplicó el plazo establecido por el legislador para el pago del siniestro por parte del asegurador, y considerando también los intereses civiles que deben aplicarse en cumplimiento del artículo 4º ordinal 8º de la Ley 80 de 1993, resulta imperativa la terminación del proceso de cobro coactivo que nos concierne en lo que respecta a mi representada. Esto se fundamenta en que la Compañía Mundial de Seguros realizó el pago efectivo el 17 de julio de 2024, mediante la orden de pago No. 1117663 por un valor de **SEIS MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$6,380,899,838.00)** a favor del Departamento del Putumayo.

ORDEN DE PAGO

Nro. 1117663

Sucursal : DIRECCION GENERAL	Fecha Emisión : 17/07/2024
Dependencia : Secretaria General	Fecha Estimada : 17/07/2024
Tipo de Pago : Pago Electrónico Aut	

Beneficiario : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Documento 800094164
Pago a nombre de : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Valor en \$,380,899,838.00

Valor en letras

SEIS MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE * * * * *

Descripción Abreviada

DETALLE DEL PAGO

La liquidación correcta del valor pagado por la aseguradora es la siguiente, hecha conforme a la Ley 80 de 1993 y lo resuelto en el trámite de sanción contractual:

En primer lugar, se tomó el valor de \$5.247.963.388,488 indicado en la sanción contenida en el acto administrativo, el cual se actualizó o indexó según el artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993. Para ello, se tuvo en cuenta el IPC inicial de junio de 2023 (133.78), mes siguiente al que se notificó el acto administrativo que confirmó la sanción, y el IPC final, que corresponde, según la certificación del Banco de la República, al mes de junio de 2024 (143.38), siendo este índice el que debe utilizarse para julio de 2024, lo cual arrojó como resultado del capital actualizado la suma de\$5.624.555.269,95.

Luego, al valor del capital actualizado, indicado inmediatamente antes, se le sumaron los intereses moratorios, aplicando (acorde con el citado artículo 4 L.80/93), el doble del interés legal civil, es decir el 12% anual, convertido a la tasa mensual (del 1%), por cada mes desde el 16 de junio de 2023, fecha en la cual se cumplió el término de un mes, que conforme al artículo 1080 del C.Co. tenía la aseguradora para pagar el valor de la sanción impuesta. Los intereses moratorios liquidados como lo

ordena la ley hasta el 18 de julio de 2024, ascienden a\$756.344.668.

El resultado total de la liquidación, entonces se obtuvo sumando el capital actualizado y los intereses moratorios, que se cancelaron a través de la cuenta bancaria dispuesta por el Departamento, así:

$$\text{\$5.624.555.269,95} + \text{\$756.344.668} = \text{\$6.380.899.837}.$$

En este orden de ideas el artículo 1625 del Código Civil Colombiano dispone en su numeral primero que la obligación se extingue por la solución o pago efectivo de la misma. A su vez el artículo 1626 de la misma normativa establece que:

“el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, (negrilla adrede)

Igualmente, el artículo 1627, indica que

“El pago se hará bajo todos respetos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes.” (negrilla adrede)

Bajo este panorama, resulta procedente que el Departamento del Putumayo, como ejecutor de la obligación, deberá dar aplicabilidad al contenido del artículo 596 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, en lo que atañe al trámite subsiguiente una vez se declaren probadas las excepciones contra el mandamiento de pago, así

“ARTÍCULO 596. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado.

En igual forma, procederá sien cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones. Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes”

Luego, podemos afirmar con total certeza que en el presente caso **OPERA EL PAGO COMO MODO DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**. Además, dicho pago se considera **PAGO EFECTIVO**, pues a la luz del artículo 1627 del Código Civil, el pago se hará en todos sus aspectos conforme al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes.

7. EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INCURRIÓ EN UN ERROR AL EXCEDER EL LÍMITE DE EMBARGABILIDAD, LO QUE TORNA IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR.

El Departamento del Putumayo excedió su competencia al proferir la Resolución No. 059, mediante la cual se libró mandamiento de pago y se ordenó una medida preventiva, ya que decretó como medida cautelar el embargo de los bienes pertenecientes a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., tales como inmuebles, muebles, dinero depositado en cuentas de ahorro o corriente, y depósitos de dinero en las cuentas de ahorro y/o corriente de la entidad, hasta alcanzar la suma de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$16.509'304.622,8).

No obstante, lo anterior desconoce lo establecido en el artículo 604 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, en lo atinente a que el valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda mas intereses, así:

“ARTÍCULO 604. LÍMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.” (negrilla adrede)

En ese sentido el límite de los embargos para el caso de marras resulta abiertamente inconsulto e infundado por cuanto no puede perderse de vista que la liquidación del crédito que en derecho corresponde no es otra más que una en la que se aplique el interés moratorio variable mes a mes, conforme a las certificaciones que para el efecto emite la superintendencia financiera, y las cuales son de fácil acceso para la consulta de la entidad y de cualquier particular. A continuación, expongo la liquidación que elaboramos internamente, respetando la tasa de interés mensual certificado por la Superfinanciera para cada uno de los meses comprendidos entre el 16 de mayo de 2023 y el 15 de julio de 2024, así:

Actualización valor histórico	
CAPITAL	\$ 5.247.963.388,45
IPC FINAL	143,38
IPC INICIAL	133,78
Valor Actualizado	\$ 5.624.555.169,95

Fecha inicial	Fecha final
16/06/2023	31/12/2023
1/01/2024	18/07/2024

<u>Valor total a pagar Capital</u> <u>Actualizado + Intereses</u>	\$ 6.380.899.837,95
--	---------------------

De acuerdo con la liquidación anterior, se evidencia que el monto total de la obligación, correspondiente a **SEIS MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (\$6,380,899,838.00), resulta ser inferior al valor liquidado por el Departamento del Putumayo. En consecuencia, la medida preventiva excede del doble de la deuda más sus intereses. Es importante señalar que los intereses imputables a la compañía de seguros se generaron a partir del mes siguiente a la ejecutoria del Acto Administrativo que confirma el título ejecutivo complejo, es decir, a partir del 16 de mayo de 2023. Además, la compañía debió liquidar los intereses aplicando la regla establecida en el artículo 4 ordinal 8 de la Ley 80 de 1993, estatuto de la contratación estatal.

En ese sentido el límite del embargo desconoce lo normado por el Estatuto Tributario.

“ARTÍCULO 886. Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos.

Adviértase que la medida resulta exorbitante de cara a la realidad de la obligación que se predica respecto de mi procurada, por cuanto como se expuso a lo largo del escrito, la liquidación del crédito se emitió con serias inconsistencias e irregularidades en su tasación. Además, el límite de embargabilidad excede el valor asegurado en el amparo de buen manejo del anticipo que se afectó a través de la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023. La medida deberá ser levantada por cuanto los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, el Departamento del Putumayo deberá aplicar lo establecido en el artículo 602 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, así:

“ARTÍCULO 602. MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.
Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la administración tributaria departamental.

PARÁGRAFO. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se

encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ordenará levantarlas.”

Como se probó en párrafos anteriores, mi representada impugnó ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos administrativos que sirven de título ejecutivo. El 22 de abril de 2024, se interpuso acción de controversias contractuales y el Tribunal del Putumayo asumió competencia el 22 de junio de 2024, razón suficiente para levantar las medidas decretadas.

En mérito de lo expuesto, se realizan las siguientes:

IV. PETICIÓN

ÚNICA: Solicito al **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, se **REPONGA** para **REVOCAR** la Resolución No. 059 del 24 de junio de 2024 por medio de la cual se libra mandamiento de pago y se ordena medida preventiva, y por tanto se ordene la terminación del proceso coactivo administrativo de la referencia procediendo con el levantamiento de las medidas preventivas decretadas en contra de mi representada **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, en concordancia con lo establecido en el artículo 833 del Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, y de conformidad con el artículo 596 del Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, declarando probadas las excepciones propuestas y debidamente sustentadas en el presente escrito.

V. ANEXOS

1. Liquidación de intereses crédito, de conformidad con el artículo 1080 del Código Civil y el artículo 4º, ordinal 8º de la Ley 80 de 1993.
2. Copia simple orden de pago N° 1117663 del 17 de julio de 2024.
3. Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 24 de abril de 2024 radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01(44472).

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito recibe notificaciones en la Calle 69 No. 4-48, Of. 502 de la ciudad de Bogotá o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 expedida de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.